

LAS IGLESIAS FRENTE AL TLC Y AL ALCA

GUSTAVO CASTRO SOTO

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO; 21 DE MAYO DE 2003

Se acerca ya la V Cumbre Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se llevará a cabo del 10 al 14 de septiembre del presente año en Cancún, en el estado de Quintana Roo, México. Si los Tratados de Libre Comercio (TLC) son imposiciones de los países más fuertes ante otro más débil; el Plan Puebla Panamá (PPP) es la expresión regional de esas reglas en un conjunto de países; el Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA) es la expresión continental de esas reglas como lo es la Unión Europea para aquél continente; la OMC es entonces la expresión mundial de las reglas comerciales en beneficio de las grandes corporaciones multinacionales. Por tanto, no podemos desligar estos cuatro elementos: TLC-PPP-ALCA-OMC.

El pasado 14 de marzo fueron inauguradas las instalaciones para las oficinas del ALCA en la ciudad de Puebla en medio de protestas y manifestaciones. En esos mismos días el Comité Mexicano de la Campaña Continental Contra el ALCA se reunieron con altos funcionarios de la Secretaría de Economía, entre otros con Fernando de Mateo, responsable de las negociaciones comerciales internacionales de México, para esclarecer la postura del gobierno mexicano frente a las negociaciones del ALCA. En un boletín de prensa el Comité afirmó que la declaración de Fernando de Mateo fue clara: “¡La postura de México en las negociaciones del ALCA no es asunto de interés público!” (el boletín de prensa se puede consultar en www.noalca.org y para más información: www.asc-hsa.org).

Los resultados desastrosos de los TLC y que agudizará el ALCA no pueden ser desapercibidos ya por ningún sector; además de ser un tema de interés, debate y construcción pública. El libre mercado prometió desarrollo, combate a la pobreza, justicia, equidad y empleos entre otras muchas cosas. Sin embargo, esto no ha sido así. En este contexto y por su importancia rescatamos la posición de los obispos canadienses, mexicanos, centroamericanos, sudamericanos y de iglesias evangélicas.

En un mensaje del 29 de enero de 2003, los Obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de México expresaron su análisis sobre la situación del campo mexicano, dirigido a los hermanos y hermanas del campo, a los católicos de México, al Gobierno de México y todas las personas de buena voluntad. En él manifestaron que el mensaje es “una invitación a la reflexión a la sociedad mexicana y a nuestras autoridades sobre la delicada situación que experimentan millones de campesinos y campesinas desde hace ya bastante tiempo y que, en los últimos años, ha venido agravándose”. Los obispos agregaron que “Somos testigos del profundo respeto que los hermanos que viven en el campo tienen por la tierra. Reconocemos que en ella están hundidas raíces familiares, comunitarias y de la manera de vivir que en torno a la propia tierra se genera. De manera especial quisiéramos resaltar lo que la tierra significa para nuestros hermanos indígenas, que mantienen con ella una relación vital, y en torno a la que han construido un fuerte sentido comunitario y religioso.”

Los obispos señalaron que constatan “con profunda preocupación una tendencia preponderante a ver la tierra sólo “como un medio de producción, un capital, un artículo que se compra y que se vende”. La acumulación desmedida, el desplazamiento de las tierras de sus originales propietarios, el despojo, y la destrucción de los espacios comunitarios que vivimos en el país, son situaciones injustas “que claman al cielo”. Y agregaron que “Si sigue imponiéndose sólo la lógica del mercado sobre el campo, no podremos esperar otra cosa que mayor pobreza, destrucción de la cultura rural, emigración, y lo que es peor, una espiral de violencia y muerte incompatibles con el plan de Dios que desea una vida digna y justa para sus hijos e hijas.”

Los pastores de la Iglesia Católica mexicana alertaron que “En razón de su dignidad que le viene de su ser creado por Dios a su imagen y semejanza y redimido por Cristo, todo hombre tiene derecho a la vida y a una vida digna. Este derecho comporta el rechazo a toda forma de violencia. La violencia de la pobreza, de la miseria, de los daños al medio ambiente, son hoy una realidad que padecen millones de hermanos en nuestro México. Como pastores constatamos día a día que el campo es uno de los ambientes en donde esta violencia se ejerce con mayor fuerza.”

“Con estas palabras –dijeron los obispos- queremos hacer llegar un mensaje de solidaridad a todos ustedes hermanos del campo que día con día experimentan el flagelo de la pobreza y de la miseria. A ustedes que ven cómo sus familias se destruyen por la emigración de sus integrantes ante la dificultad de extraer de la tierra lo mínimo necesario para vivir. A ustedes hermanos que en las últimas décadas han experimentado el deterioro de su calidad de vida ante la falta de servicios educativos y de salud y han visto mermada su actividad económica. Son ustedes el juicio que pende sobre el mundo en su peculiar manera de organizar la esfera económica, que ha excluido, y continúa haciéndolo, a millones de hermanos del banquete de la creación. Son ustedes, sin embargo, los que hoy son llamados a afirmar la vida en medio de la muerte, mostrándonos que desde la pobreza puede hacerse un camino que nos haga crecer en humanidad; un camino en donde la vida sea reconocida como don gratuito, en donde la generosidad desborde los recursos materiales propios, en donde se mantenga la capacidad de celebración y de alegría en medio de las penalidades de la existencia.”

El diagnóstico fue descrito así por los obispos: “En México, en donde una de cada cuatro personas vive en las zonas rurales, trabajando directa o indirectamente en las actividades agropecuarias, se constata una realidad lacerante: la mayoría de las personas que allí habitan está en condiciones de pobreza y un buen número de ellas en situación de pobreza extrema. Esta situación es especialmente dramática entre los Pueblos indios”. Agregaron que “A lo largo de nuestra historia, ha habido una permanente discusión sobre el desarrollo del campo mexicano. Muchos de nuestros grandes conflictos han estado ligados al mundo rural. Hace un siglo se discutía la propiedad de la tierra, hoy la discusión está centrada en el tipo de desarrollo que para el mundo rural queremos, el que no puede estar desligado de nuestro proyecto de nación.”

Para el episcopado “Desde hace treinta años el campo mexicano ha venido sufriendo un constante deterioro, en particular los campesinos minifundistas, quienes son la gran mayoría, debido a diversas cuestiones: la manera corporativa en que durante muchos años se manipuló políticamente al campo; la carencia de apoyos necesarios a la producción tales como infraestructura, inversión en la investigación y financiamiento; la comercialización que llevó al enriquecimiento de los introductores pero no de la mayoría de los productores; y una serie de políticas públicas que se orientaron más a garantizar el abasto con importaciones, que al aumento de la productividad, y que por sus efectos, son hoy cuestionadas.”

Los obispos se remontan a la historia y confirman que “Además en las últimas décadas, se ha intensificado el proceso de globalización con un fuerte acento en sus aspectos económicos. México, a partir de 1986, y especialmente en los años noventa se incorporó a este proceso. De ahí que en 1993 se firmara un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América y con Canadá. Esto trajo consigo una modificación de las políticas públicas en relación al campo”. Y añadieron que “Los resultados de este tratado han sido benéficos para algunas regiones y algunos productores del país, pero la mayoría de los productores, pequeños productores, campesinos e indígenas han visto severamente deteriorada su actividad económica y su calidad de vida.” Y de casos hay muchos. Los obispos ponen el ejemplo de que entre los “sectores beneficiados están los productores de legumbres, hortalizas y frutales, quienes tuvieron la oportunidad de aprovechar las ventajas del Tratado. Sin embargo, otros como los productores de granos y carne se han visto afectados negativamente. Cabe destacar que mientras los primeros se cuentan en decenas de miles, los segundos ascienden a tres millones.”

Para los obispos “en tanto no sea alcanzada la productividad óptima para competir en condiciones de igualdad con nuestros socios comerciales, la situación de pobreza en el campo será cada vez más lacerante. Como pastores, reconocemos que al nivel de la producción hay muy distintas capacidades. Sólo una pequeña parte de las unidades de producción está tecnificada mientras que la gran mayoría son de producción tradicional, cuando no de subsistencia. Así, constatamos que la producción para el autoconsumo ha aumentado y la venta de los productos al mercado interno ha disminuido”.

Pero junto con la pobreza la población rural abandona el campo aceleradamente. Ante esto, los pastores de la iglesia católica mexicana afirman que “El fenómeno de la migración, sobre el que hace unos días nos hemos pronunciado, en conjunto con la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos de América, aumenta de manera preocupante. En esta reciente carta pastoral afirmamos que: “toda persona tiene el derecho a encontrar en su propio país oportunidades económicas, políticas y sociales, que le permitan alcanzar una vida digna y plena mediante el uso de sus dones”. Y agregan que “Dado que en los últimos años la economía de México no ha crecido al ritmo necesario para incorporar la mano de obra de la dispone la sociedad mexicana, menos aún ha podido dar empleo a la que se ha desplazado desde el campo hacia otros sectores de la economía, lo que ha provocado la migración forzosa de personas, familias y comunidades, en condiciones peligrosas y precarias. Esta migración se ha incrementado principalmente hacia los Estados Unidos de América. Muchos de ellos en su condición de indocumentados, sufren en el camino y en su destino agravios a sus derechos y dignidad de personas. Y también muchos han encontrado la muerte al tratar de cruzar la frontera que divide prosperidad y miseria.”

Y es que los bajos precios de los productos del campo y la importación cada vez mayor de alimentos provenientes de los Estados Unidos, ponen en mayor peligro al país. “Este hecho –razonan los obispos- nos lleva a señalar con preocupación, que poner en cuestión nuestra soberanía alimentaria, representa para el país una gran inseguridad a futuro. Esta es una decisión que merecería un amplio debate nacional, junto con el reto ético que plantea el tema de las normas de calidad de los alimentos, incluidos los de importación, las que deberían ser más rígidas. También queremos señalar, en materia alimentaria, el fenómeno de la desnutrición en niños y adultos que a pesar de los esfuerzos no parece tener signos de abatimiento. En el medio rural uno de cada seis niños padece desnutrición, y a nivel nacional la mitad de los niños menores de dos años sufre de anemia.”

Estos acontecimientos, “nos mueven a expresar nuestra palabra solidaria y enérgica que proclama con la Iglesia toda, la necesidad de la primacía de la persona en todo modelo de desarrollo. En estos tiempos de globalización, en que pareciera que el mercado lo domina todo es oportuno recordar las palabras de Juan Pablo II que afirma que “no todas las necesidades humanas pueden y deben solventarse en el mercado”.

Los obispos insisten en que los acuerdos deben tomar en cuenta las diferencias. Para ellos “México ha negociado en los últimos años una gran cantidad de tratados comerciales con otros países. Pablo VI afirmaba en su encíclica “*Populorum Progressio*”: “(...) la enseñanza de León XIII conserva su validez: el consentimiento de las partes, si están en situaciones demasiado desiguales, no basta para garantizar la justicia del contrato; y la regla del libre consentimiento queda subordinada a las exigencias del derecho natural...el libre intercambio sólo ha de ser tenido por justo cuando se subordine a las exigencias de la justicia social”. Así, para los obispos “Este texto nos permite iluminar el debate que se ha intensificado en estos días sobre la justicia del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y especialmente en lo referente al capítulo agropecuario. Valdría la pena preguntarnos si en la negociación del Tratado se consideraron las asimetrías entre la infraestructura, el financiamiento y los apoyos a la producción disponibles entre los productores estadounidenses y canadienses por un lado y los mexicanos por el otro.”

La iglesia católica mexicana sentencia así a los tratados de libre comercio: “La realidad nos permite afirmar que si bien un pequeño grupo de productores se ha beneficiado de la negociación y la entrada en vigor del TLCAN, un amplísimo sector ha quedado excluido de estos beneficios. La brecha entre la agricultura de exportación, que dispone de financiamiento y acceso a mercados y la agricultura para el autoconsumo o de consumo local y regional, que no dispone de financiamiento y enfrenta numerosas barreras para su desarrollo, se ha agrandado. A este respecto debemos recordar que los tratados comerciales que México ha suscrito son un medio, no un fin en sí mismos. Ellos deben servir como un vehículo para alcanzar mejores condiciones de vida para todos los mexicanos. Un enfoque moderno y democrático de los tratados comerciales y de su traducción en políticas públicas nacionales debe favorecer el desarrollo integral de toda la sociedad. Pues como recordamos en nuestra Carta Pastoral “la actividad económica no ha de basarse exclusivamente en el mercado, sino que debe someterse a normas y principios éticos fundados en la dignidad humana, en las exigencias de la justicia social y en el destino universal de los bienes queridos por el Creador”.

Sin embargo, para los obispos, si bien es “inadecuado e injusto que se les haga responsables exclusivamente a ustedes hermanos campesinos y productores de la situación deplorable que vive el campo mexicano”, no deja de señalarlos como culpables. Y tendrían razón los obispos si por ello se entendiera la pasividad del campesino para revelarse contra la injusticia, pasividad muchas veces fomentada, avalada e impulsada por muchos sectores de la Iglesia Católica, con sus honrosas excepciones.

El análisis de los obispos va justo al debate neoliberal, aunque nunca utilizan este concepto en el documento, en cuanto al papel que juega el Estado o que pretende dejar de jugar en la economía. Para el modelo neoliberal el Estado es intrínsecamente un estorbo del cual sólo se puede usar en esta fase sólo el monopolio legal de la represión, mientras no se privaticen los cuerpos policíacos y las funciones de los ejércitos nacionales. Así, los obispos, quieran o no, definen una posición política anti neoliberal: “El Estado tiene una responsabilidad social que debe buscar no sólo paliar los efectos de la pobreza, sino también atacar sus causas profundas. El gasto público, que en México está fuertemente comprometido para el pago de intereses de las deudas interna y externa, ha venido reduciéndose significativamente. Mientras esto pasa en México, nuestros socios comerciales han aumentado los apoyos para sus productores del campo. Hacemos un llamado a nuestros Gobernantes a seguir estrategias de largo plazo en orden a fortalecer nuestra agricultura, con criterios de seguridad alimentaria, siguiendo políticas integrales de apoyo que incluyan investigación e innovación tecnológica y que favorezcan la cultura rural”.

La sentencia del episcopado sobre el TLCAN es de un trato injusto, inequitativo y que agudiza las consecuencias en el campo como “son la pobreza, el abandono, la ruptura de los vínculos familiares y comunitarios, la migración forzada, el deterioro del medio ambiente”. Ante la esencia intrínseca excluyente del modelo neoliberal, los obispos se suman a las voces que reclaman “construir un proyecto basado en la justicia, plural e incluyente para nuestro México”. Proponen así algunos criterios y líneas de acción que se deben tomar para buscar una solución al campo mexicano están: 1) “reconocer el derecho fundamental y primordial de todo mexicano a la vida” y que debe ser “anterior a cualquier tratado comercial o político”. 2) Asumir la corresponsabilidad entre Gobierno, campesinos, productores y todos los demás actores de la sociedad. En este contexto, el episcopado trae a la memoria las palabras del Papa Juan Pablo II, del 29 de enero de 1979 en Oaxaca, a los indios de Oaxaca y de Chiapas “(...) el mundo deprimido del campo, el trabajo que con su sudor riega también su desconsuelo, no puede esperar más a que se reconozca plena y eficazmente su dignidad, no inferior a la de cualquier otro sector social (...) Tiene derecho a que se le respete (...) Tiene derecho a que se le quiten barreras de explotación (...) Tiene derecho a la ayuda eficaz –que no es limosna ni migajas de justicia- para que tenga acceso al desarrollo que su dignidad de hombre y de hijo de Dios merece”.

3) Piden al Gobierno Mexicano frenar los acuerdos comerciales y que “las controversias que de ellos surjan busque el mayor bien, para el mayor número de personas, durante el mayor tiempo y con los menores costos posibles”. 4) “Apoyar a los organismos, instituciones y grupos intermedios que trabajan a favor de los campesinos y de la conservación de sus tradiciones, a aquellos que promueven una distribución y uso más justo de la tierra, los progresos técnicos indispensables para que la tierra produzca; los que buscan un comercio justo para los productos del campo y a aquellos que se esfuerzan en favorecer una reflexión teológica a favor de la tierra, es indispensable en estos momentos”.

Cuando el EZLN se alzó en enero de 1994, en el contexto de la entrada en vigor del TLCAN, hizo un análisis certero sobre los efectos que causaría en el campo y en la población indígena. Exigieron justicia, respeto y diálogo verdadero con el gobierno mexicano, inclusión en el proyecto económico, entre otras muchas demandas. Particularmente propusieron y llevaron a cabo el diálogo para la Reforma del Estado que se llevó a cabo en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas y al cual ni el gobierno ni los obispos se sumaron. Muchos de estos esfuerzos fueron criticados o ignorados por la mayoría de los obispos que incluso criticaron no sólo a los indígenas sino al obispo Samuel Ruiz García, en ese entonces presidente de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI), papel y espacio que muchos de ellos deseaban ocupar.

Sin embargo, ahora la conferencia episcopal llama a la 5) “realización de un amplio debate nacional, no sólo necesario sino urgente, para nuestro proyecto de país a largo plazo, con un compromiso auténtico de todas las fuerzas sociales, con método de trabajo, con objetivos básicos a alcanzar en orden a definir el lugar que debe ocupar la sociedad rural y la capacidad de producción de alimentos para toda la población. En este debate, en el que ha de buscarse revalorizar la agricultura nacional con los mismos campesinos, en el que debe haber inclusión de toda la sociedad rural y no sólo de algunos sectores, en el que como meta debe estar incluida la búsqueda de la equidad y la disminución de la pobreza rural, en el que ha de tenerse presente el criterio de sustentabilidad, en el que se reconozcan plenamente los derechos y la cultura de los pueblos indios, ha de buscarse reconstruir la relación entre el Estado Mexicano y la sociedad rural”.

Con esto nos damos cuenta que, como se dice, la Iglesia, aunque tarde, siempre llega. Y lo que hasta aquí se han expuesto no es en realidad ninguna novedad en el análisis ya dicho hasta el cansancio por muchos actores, por los mismos campesinos e indígenas. Lo interesante es que lo digan ellos, los propios obispos que manifiestan que “Ante la situación de emergencia ambiental, económica y sociocultural que vive el campo, llamamos al Gobierno a escuchar a la sociedad, a dialogar con los campesinos y demás productores del campo y a utilizar todos los recursos a su alcance en orden a asegurar el beneficio de la población actualmente excluida del desarrollo. Los tratados comerciales de ningún modo representan un compromiso fatal e inamovible. Las partes involucradas tienen siempre la oportunidad de recurrir a mecanismos y salvaguardas en situaciones de emergencia. El libre juego de las fuerzas del mercado no corrige por sí mismo la exclusión y la pobreza. Rescatar el campo significa rescatar la oportunidad de construir un futuro mejor para las generaciones venideras. Esto es una obligación ética, una necesidad económica y un imperativo político”.

Hasta aquí la carta de los obispos mexicanos. Por otro lado, en un reportaje de José Antonio Román, el periodista comparte la postura de los obispos católicos de México y Centroamérica quienes se reunieron en Costa Rica a principios de este año. A continuación reproducimos parte de su reportaje: “Los obispos católicos de México y Centroamérica expresaron su "grave preocupación" por las consecuencias sociales que puede originar el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) y el Plan Puebla-Panamá, pues bajo el actual modelo económico "en todos los países de la región" se ha constatado la creciente brecha entre ricos y pobres, pese a la creciente riqueza global. En su declaración los responsables nacionales de la Pastoral de Movilidad Humana de las conferencias episcopales de Centroamérica y México exigieron a los gobiernos de la región un trato generoso,

justo y humano para todos los migrantes y que las políticas de tránsito de personas no fomenten actitudes xenófobas o racistas, de tal forma que protejan sus derechos y dignidad humana.

Pero la **Iglesia Evangélica** no se queda atrás. En el Boletín informativo de la Campaña Continental contra el ALCA del viernes 9 de mayo de 2003, informaron que en la Consulta Continental "Globalizar la Vida Plena", que se llevó a cabo del 28 de abril al 1º de mayo en Buenos Aires, Argentina, los representantes de Iglesias de América Latina y el Caribe llamaron a la creación de un "frente para conseguir la abolición de "la deuda externa inmoral, imposible y eterna". El mensaje a las iglesias evangélicas de la región, incluye el rechazo al Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) y a la "militarización" de la región por parte de los Estados Unidos, pronunciándose en favor de una "amplia y profunda integración, fundada en los derechos humanos y el cuidado de la creación". En el documento "Las Iglesias Evangélicas dicen: ¡Basta!", se plantearon los siguientes cuestionamientos al ALCA:

"1.- El grueso de las relaciones económicas, comerciales y financieras se concentra entre los países del norte. Por ejemplo, 28 países constituyen las economías más avanzadas, producen el 56.6% del producto mundial, exportan el 78.5% de los bienes y servicios y constituyen el 15.8% de la población mundial. De esos países, el Grupo de los Siete producen el 45.5% del producto mundial, el 48.8% de las exportaciones y significan el 11.8% de la población.

"2.- Existe el temor que esta integración favorecerá a las grandes empresas transnacionales del continente. No se trata de fortalecer los capitales nacionales y los mercados internos, sino un acuerdo de competencia entre desiguales, que inevitablemente significará el sometimiento o la eliminación de los más débiles.

"3.- América Latina pasa a ser un espacio de inversión y obtención de rentabilidad bajo los siguientes criterios: mano de obra barata; espacio de inversión principalmente en los servicios y mercados emergentes; un mercado para el capital financiero especulativo que busca una rentabilidad propia.

"4.- Se trata de una integración de capitales, no de pueblos ni personas. El flujo de capitales se agiliza, pero se imponen mayores restricciones a la movilidad de las personas. "Una integración con rostro latinoamericano llama la atención. El desafío sería si se podrá hablar de una integración económica con lenguaje propio, con libertad para aceptar o no las demandas del capital financiero y con una visión más integral de la integración."

Por su lado, en una entrevista llevada a cabo por Dermi Azvedo el 17 de mayo de 2003 a **Monseñor Pedro Casaldáliga**, el obispo destacó que "el neoliberalismo es el capitalismo transnacional llevado al extremo. El mundo convertido en mercado al servicio del capital hecho dios y razón de ser. En segundo lugar, el neoliberalismo implica la desresponsabilización del Estado, que debería ser el agente representativo de la colectividad nacional. Y agente de servicios públicos." Pedro Casaldáliga es obispo de São Félix do Araguaia (Mato Grosso, Brasil). Azvedo confirma que es una de las personalidades más representativas de la Iglesia de los Pobres en Brasil, en América Latina y en el mundo. Como misionero claretiano llegó a trabajar a la Amazonia hace 25 años. Es uno de los fundadores del Consejo Indigenista Misionero (CIMI) y de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) de la Iglesia brasileña. La dictadura militar intentó cinco veces expulsarlo del país. Su Prelatura fue invadida cuatro veces en operaciones militares. En 1977 fue asesinado a tiros, a su lado, el padre Juan Bosco Penido Burnier; él y Pedro protestaban contra las torturas que practicaba la policía contra mujeres presas.

En la entrevista Casaldáliga expuso: "Me preguntaron varias veces, en este viaje, qué puede decir o hacer la Iglesia ante el neoliberalismo. Yo, recordando los consejos de nuestros antiguos catecismos ('contra pereza, diligencia; contra gula, abstinencia') respondí: 'contra el neoliberalismo, la siempre nueva liberación'". Y agregó: "Al desresponsabilizar al Estado, de hecho se desresponsabiliza la sociedad. Deja de existir la sociedad y pasa a prevalecer lo privado, la competencia de los intereses privados. La privatización no deja de ser el extremo de la propiedad privada que, de privada, pasa a

ser privativa y que, de privativa, pasa a ser privadora de la vida de los otros, de las mayorías. La privatización es privilegización, la selección de una minoría privilegiada que, ésa sí, merece vivir, y vivir bien.”

Para Casaldáliga el neoliberalismo es la negación de la utopía, la mentira institucionalizada, la degeneración de la persona y la negación de la comunidad. El neoliberalismo es la marginación fría de la mayoría sobrante. “O sea, salimos de la dominación hacia la exclusión. Y, como se suele decir, hoy ser explotado es un privilegio, porque muchos ni siquiera alcanzan la 'condición' de explotados, ya que no tienen ni empleo. Estamos viviendo entonces lo que se llama un 'maltusianismo' social, que prohíbe la vida de las mayorías.”

En el contexto de las elecciones políticas en América Latina, el obispo Casaldáliga manifestó que: “bajo el poder del capital neoliberal, representado por el FMI y por el Banco Mundial, la alianza de esos políticos de marketing, al servicio del mismo neoliberalismo y ante la impotencia de amplios sectores de las fuerzas populares, es de temer que se repitan, con algunos retoques, las elecciones de años anteriores y hasta de siglos atrás, como usted señala. La táctica en todas partes es la misma. Las promesas, los programas acaban siendo los mismos. Todos los partidos conocen muy bien las necesidades del pueblo y saben programar teóricamente soluciones”. Para el obispo “debemos ir posibilitando, entre todos, la integración latinoamericana de un modo alternativo. Ni el MERCOSUR (Mercado Común del Cono sur), ni el NACLA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá y México). México lo está pasando mal. Muchos empresarios tuvieron que cerrar sus empresas. El obispo de Chiapas, Mons. Samuel Ruiz, me dijo que se puede prever cualquier tipo de insurrección en el país. Ya se llegó al extremo de importar leche de Australia.”

Por su lado, El **Premio Nobel de la Adolfo Pérez Esquivel** y quien recientemente estuvo en Chiapas en el I Encuentro Hemisférico frente a la Militarización <www.desmilitarizacion.org>, denunció ante representantes de Iglesias latinoamericanas, dentro del marco de la Consulta Continental "Globalizar la Vida Plena", realizada en Buenos Aires, Argentina, que "el ALCA es la anexión clara y concreta de América Latina por los Estados Unidos". Sostuvo, que esa iniciativa es un ejemplo del "totalitarismo globalizado que los Estados Unidos tratan de imponer en todo el mundo", que incluye hasta un "pensamiento único".

Por su parte, las **iglesias de Canadá** declararon: "nos oponemos abiertamente al ALCA y seguimos buscando alternativas para ofrecer". Este evento fue convocado por el Consejo Latinoamericano de Iglesias y contó con la participación de más de cien representantes de los cinco continentes. (Consejo Mundial de Iglesias, Oficina de relaciones con los Medios de Información: media@wcc-coe.org, www.wcc-coe.org).